



INCÓGNITA POLICIAL.— Personal del Laboratorio de Carabineros buscó pistas de los autores del atentado explosivo del viernes en un paradero del Transantiago en avenida Vicuña Mackenna.

Muerte de Sergio Landskron (2014) y atentado a Óscar Landerretche (2017) están entre casos no resueltos: Las múltiples esquilas que dificultan detener a los responsables de los ataques con bombas

EQUIPO DE CRÓNICA

Si la defensa de Óscar Landerretche está inquieta porque a casi dos años del atentado que el expresidente de Codelco sufrió en su hogar aún no hay detenidos, la familia de Sergio Landskron tiene razones para sentir desazón. El joven murió hace más de cuatro años al explotar una bomba, en el barrio Yungay. Y tampoco hay responsables.

Ambos casos ilustran lo complejas que son estas investigaciones para el Ministerio Público y las policías. Desde el fracaso del caso Bombas I, en 2012, estos ataques nunca cesaron del todo. En 2017 había 52 expedientes abiertos, la mayoría sin detenidos. El ataque más reciente, el viernes, dejó cinco heridos en un paradero del Transantiago en Vicuña Mackenna. Y en los últimos seis años, la fiscalía ha logrado cinco condenas: Luciano Pitrorello (2012), Hans Niemyer (2013), Carla Verdugo e Iván Silva (2013), Juan Flores (2018) y Joaquín García y Kevin Garrido (2018). Este último falleció en prisión, apunhalado por otro reo.

Abanico de factores

¿Por qué es tan difícil detener a los autores de los bombarzos? Concedores del tema apuntan a varias razones: un sistema de inteligencia anticuado, falta de especialistas, una legislación ambigua y el surgimiento de pequeños grupos violentistas sin estructura.

Si bien parece prematuro exigir resultados a quienes indagaron el bombarzo en Vicuña Mackenna —Juan Flores fue capturado 14 días después de haber colocado el artefacto del Subcentro Escuela Militar—, hay consenso en que la falta de detenidos por los anteriores es preocupante. El senador Felipe Harboe (PPD), el exministro del Interior Jorge Burgos (DC) y el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), por ejemplo, cuestionan el sistema de inteligencia.

“No es el adecuado para el nivel de amenazas del siglo XXI”, plantea el legislador por el Biobío, en alusión a la información

Cuando la pesquisa del atentado en Vicuña Mackenna recién comienza, concedores del tema apuntan a un sistema de inteligencia obsoleto, falta de especialistas, una legislación ambigua y agresores atomizados.



El equipo liderado por el fiscal Guzmán logró una pena de 23 años contra Juan Flores. Grabaciones de cámaras de seguridad del metro y los viajes registrados en la tarjeta bipl del condenado fueron claves para esa sentencia.

“Más allá de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio Público en el último tiempo, o de los logros del fiscal Guzmán, no tenemos fiscales ni jueces especializados en terrorismo”.

FELIPE HARBOE
 Senador PPD

“La inteligencia de Carabineros, que en buena medida resolvió el tema del bombarzo en el metro Escuela Militar, quedó absolutamente destruida después de la polémica y del acto de brutalidad que significó el caso Huracán”.

JORGE BURGOS
 Exministro del Interior

Fiscal Guerra respalda idea de crear un registro nacional de compradores de elementos explosivos

“La experiencia demuestra que, por ejemplo, interceptando celulares no se saca mucho”, dijo ayer el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en entrevista con Radio Universo. En el antiguo caso Bombas, ejemplificó, llegaron a haber más de 80 teléfonos “parchados” y “nunca se encontró resultado por esa vía”. Eso, explicó, porque son delitos difíciles de perseguir: “Se trata

de personas que actúan compartidamente, trabajan a nivel celular, por decirlo de algún modo”. Por ello, afirmó ser partidario de crear un “registro de control de lo que son explosivos, y diría también de materiales que sirven para generar explosivos”.

En Chile —comentó— el tema está más enfocado en la Ley de Drogas, en el control de esos productos químicos, más que en materia de explosivos.

que circula en la llamada internet profunda u oscura. Burgos valora la labor de la inteligencia de Carabineros que resolvió el caso Subcentro, pero advierte que aquella quedó “absoluta-

mente destruida” tras la “Operación Huracán”. Y el legislador de Chile Vamos cree que el país carece de un sistema capaz de prevenir “la actuación terrorista de grupos organizados que se mue-

Falsas alarmas: “Todo acaba siendo un objeto sospechoso”

En la tarde de ayer un nuevo aviso por un bulto sospechoso llegó al GOPE de Carabineros. Se trataba de una caja blanca con cinta adhesiva ubicada bajo un basurero en la calle Gloria, comuna de Las Condes. El operativo obligó a interrumpir el tránsito por casi una hora en el sector, hasta que personal de Carabineros descartara la presencia de un artefacto explosivo.

Desde el atentado del viernes pasado, que dejó a cinco personas heridas, se han registrado al menos siete alertas de paquetes sospechosos, de acuerdo a la policía uniformada.

Es un fenómeno que, según los expertos, se puede explicar por la ansiedad y estrés que producen hechos traumáticos. “Se levanta una alerta y termina siendo contagioso, quedan impregnados en la sociedad. Todo acaba siendo un objeto sospechoso tras eventos traumáticos”, explica Javier Romero, sociólogo y psicólogo de

la Universidad de Santiago de Chile.

El especialista asegura que el constante acceso a información hace que estas alertas se incorporen como algo común, sobre todo si ocurrieron hechos de alto impacto público en lugares de acceso masivo, como un paradero del Transantiago.

En tanto, la directora del Colegio de Psicólogos de Chile, Isabel Puga, enfatiza que la incertidumbre que se produce en la sociedad luego de episodios como el ocurrido el viernes pasado “es un círculo vicioso, donde se cuestiona a las autoridades y a los servicios de inteligencia en sus procedimientos”.

Sobre las consecuencias en la salud de la población, Puga asegura que principalmente en los habitantes de zonas emblemáticas de la capital —posibles blancos de eventuales ataques— se podrían presentar cuadros de ansiedad, preocupación, estrés y anticipación catastrófica.

agresores. Si hasta el caso Bombas I se distinguían vínculos entre anarquistas y exmiembros del movimiento Lautaro, que lanzaron una ofensiva contra Gendarmería, hoy se trata de grupos distintos, “sin estructura, con otras motivaciones y poca continuidad en el tiempo”.

En su período en la ANI (2010-2014), precisa, la agencia tenía gran experiencia en grupos anarquistas, un capital que, cree, se pudo haber perdido por el despido de analistas “muy competentes”.

En este escenario, Harboe llama a incorporar a expertos “de real nivel internacional”, pues, “más allá de los logros del fiscal

(Raúl) Guzmán, no tenemos fiscales ni jueces especializados en terrorismo”. Burgos, en tanto, plantea “reconstruir rápidamente” el sistema de inteligencia “con técnicas lícitas dentro

de un Estado Democrático”. Para Fuenzalida, además, se requiere una Ley Antiterrorista que defina con claridad esos actos “y tenga elementos objetivos para ser aplicados en tribunales”.

Myrna Villegas, abogada penalista y académica de la U. de Chile, señala que los ataques explosivos en la vía pública tienen condenas más altas, de 10 años y un día a 15 años, y que la ley impide aplicar penas sustitutivas.

FISCALES
 Los ataques son indagados por los fiscales Raúl Guzmán, Claudio Orellana y Claudia Cañas.



PARO.— Pese a la paralización, los recintos continuaron realizando toma de muestras, curaciones, vacunaciones y entrega de medicamentos.

Tres funcionarios fueron agredidos físicamente la semana pasada en Biobío:

Ola de agresiones en consultorios provoca paralización en San Pedro

Trabajadores solicitan mayores sanciones a quienes cometan los ataques e implementen medidas de seguridad adicionales.

VANESSA VEGA S.

Tres funcionarios de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución de Candelaria, del Centro Comunitario de Salud Familiar de Michahue y del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Boca Sur, en San Pedro de la Paz, Biobío, fueron víctimas de agresiones físicas la semana pasada.

Estos hechos, sumados a otros que han afectado anteriormente a los recintos asistenciales, llevaron a los funcionarios de los cuatro centros asistenciales de la comuna a paralizar unayer.

En total, 700 trabajadores protestaron desde la mañana y hasta las 14:00 horas con el fin de visibilizar las agresiones de las que son víctimas.

Según el director del Servicio de Salud de Concepción, Carlos Grant, han ocurrido cerca de 60 denuncias por agresiones desde que comenzaron a registrarlas en julio pasado. Las comunas más afectadas son San Pedro, Lota y Coronel.

El último hecho de violencia habría ocurrido la tarde del do-

PULSO SEGURO
 Con el botón de pánico se han enfrentado más de 300 agresiones verbales en 10 meses.

mingo, cuando un técnico en enfermería del Cesfam de Boca Sur fue agredida por una mujer mientras trataba de llamar a Carabineros. La víctima estaba golpeando a su madre en silla de ruedas.

El recinto está en la lista de los cuatro centros regionales incluidos entre los 27 “Centros de Salud Seguro” que implementará el Ministerio de Salud a nivel nacional, a los que está dotando de botones de pánico, cámaras y un protocolo

de seguridad.

Pese a la aplicación de estas medidas, en el contexto de los últimos hechos los funcionarios están demandando acciones adicionales. Martina Ascencio, dirigente regional de la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal, explica que necesitan mayores sanciones a los agresores y un carabinero de punto fijo. “La cámara es buena, pero lo único que muestra es cuando la funcionaria ya le pegaron, a mí no me da seguridad”, sostuvo.

Uno de los planes que se buscará implementar en Boca Sur son los botones de pánico, que ya son utilizados en el consultorio Víctor Manuel Fernández de Concepción, que avisan a los guardias en caso de agresión.